Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco.

**VISTOS** los expedientes electrónicos formados con motivo de los Recursos de Revisión **03498/INFOEM/IP/RR/2024, 03638/INFOEM/IP/RR/2024 y 00033/INFOEM/IP/RR/2025** acumulados, promovidos por  **XXXX**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, a quien en lo sucesivo se le identificará como **EL RECURRENTE**, en contra de las respuestas del **Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz**, en lo sucesivo **EL SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente Resolución, con base en los siguientes:

**A N T E C E D E N T E S**

1. Los días **veintitrés de abril, cuatro de mayo y veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro,** se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** vía **SAIMEX**, las solicitudes de información pública registradas con los números **00503/TLALNEPA/IP/2024, 00608/TLALNEPA/IP/2024 y 01146/TLALNEPA/IP/2024;** en la que se solicitó la siguiente información:

**Número de Folio de la Solicitud: 00503/TLALNEPA/IP/2024**

*“DE CONFORMIDAD CON los artículos 4 quinto párrafo, 6 segundo párrafo, apartado A de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 4 que en su segundo párrafo establece “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona,…”, 12 y el TITULO QUINTO, 92 fracción XXXII, entre otras de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS; Capítulos IX del ANEXO DEL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, a las CLAUSULAS SEPTIMA y OCTAVA de la Resolución de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, en favor del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, para realizar el “Proyecto de Rehabilitación del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos de Tlalnepantla a Centro Integral de Residuos” emitido por el Director General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, dependencia adscrita a la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, de fecha 12 de marzo de 2020 según oficio 22100007L/DGOIA/RESOL/225/2020, a la sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2024 en el RECURSO DE REVISIÓN: 2037/2023 Y 2038/2023 ACUMULADOS por la primera sección de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México que ha causado ejecutoria y a que el ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACION 0002/CT/O7-ORD/2022 tomado en la séptima sesión ordinaria del comité de transparencia del municipio de Tlalnepantla sin fecha resulta inoperante y exagerado por decir lo menos al haber establecido 3 años de reserva de la información pública que contiene, por lo que SOLICITO SE ME ENVIE VIA SAIMEX LA INFORMACION PUBLICA SIGUIENTE; 1.- EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 2021 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, ARRIBA MENCIONADA, ENVIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL. 2.- EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN COMENTO. 3.- EL PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 2022 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, ARIIBA MENCIONADA, ENVIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL. 4.- EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 2022 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, ARIIBA MENCIONADA, ENVIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL. 5.- EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN COMENTO. 6.- EL PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 2023 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, ARIIBA MENCIONADA, ENVIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL. 7.- EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 2023 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, ARIIBA MENCIONADA, ENVIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL. 8.- EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACION CONDICIONADA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN COMENTO.”*

**Número de Folio de la Solicitud: 00608/TLALNEPA/IP/2024**

*“DE CONFORMIDAD CON los artículos; 6 segundo párrafo, apartado A de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 11, 12 y 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 que en su segundo párrafo establece “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona,…”, 12 y el TITULO QUINTO, 92 fracción XXXII, entre otras de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y a los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS; Capítulos IX del ANEXO DEL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, por lo que SOLICITO SE ME ENVIE VIA SAIMEX LA INFORMACION PUBLICA SIGUIENTE; 1.- Se me envié el contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para el Número de cuenta: 001035140111 y Número de cuenta CLABE: 102180010351401111. 2.- Se me envié el contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para el Número de cuenta: 001035140154 y Número de cuenta CLABE: 102180010351401548. 3.- Se me envié el contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para el Número de cuenta: 001035140120 y Número de cuenta CLABE: 102180010351401205. 4.- Se me envié el contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para el Número de cuenta: 001035140138 y Número de cuenta CLABE: 102180010351401386. 5.- Se me envié el contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para el Número de cuenta: 001035140146b y Número de cuenta CLABE: 102180010351401467. 6.- Se me envié el contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para el Número de cuenta: 001035140014 y Número de cuenta CLABE: 102180010351400141. 7.- Se me envié el contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México para el Número de cuenta: 001035140103 y Número de cuenta CLABE: 102180010351401030.”*

**Número de Folio de la Solicitud: 01146/TLALNEPA/IP/2024**

*“De conformidad con los artículos; 1 y 6 segundo párrafo y su apartado A de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, 7 y 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS; Capítulo IX del ANEXO DEL ACUERDO CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, a lo que establece el “acuerdo con el principio de máxima publicidad, la apertura es la regla, y el secreto es la excepción” (Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, al CONVENIO de fecha 23 de noviembre de 2023, celebrado entre el presidente del Comisariado Ejidal del poblado de San Juan Ixhuatepec, los ciudadanos Arturo Rivas González y Alberto Cano Moran ambos ex comisariados ejidales de dicho poblado, el licenciado Rodolfo Manzo Hernández jurídico de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de México y el licenciado Jhonatan Yvy Sánchez Segura subdirector de la subdirección de tenencia de la tierra y asuntos metropolitanos con nivel de puesto 31 K dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Tlalnepantla, México, en donde este funcionario se comprometió a nombre del ayuntamiento de Tlalnepantla a dar seguimiento conjuntamente con el ejido de San Juan Ixhuatepec a gestionar ante el Instituto de la Función Registral del estado de México y/o ante la autoridad correspondiente la exención del pago de 484 títulos de propiedad Compromiso 1), por lo que solicito la siguiente información pública que debe de tener en sus archivos el ayuntamiento de Tlalnepantla, México y que me deberá ser enviada vía SAIMEX; 1. Una COPIA CERTIFICADA a mi costa, del CONVENIO CELEBRADO de fecha 23 de noviembre de 2023, entre el presidente del Comisariado Ejidal del poblado de San Juan Ixhuatepec, los ciudadanos Arturo Rivas González y Alberto Cano Moran ambos ex comisariados ejidales de dicho poblado, el licenciado Rodolfo Manzo Hernández jurídico de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de México y el licenciado Jhonatan Yvy Sánchez Segura TITULAR de la subdirección de tenencia de la tierra y asuntos metropolitanos de esta municipalidad de Tlalnepantla, México.”*

* **Modalidad de entrega**: Vía SAIMEX

1. En fecha **dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro**, se emitió respuesta a la solicitud de información 00503/TLALNEPA/IP/2024, a la que se remitió el archivo denominado *RESPUESTA SAIMEX 00503.zip*, archivo que corresponde a un archivo comprimido; que a su vez contiene cuatro archivos en formato PDF que corresponden a las respuestas de los servidores públicos habilitados de las áreas de Dirección Jurídica, quien propone la clasificación de la información, acompañado para tal efecto del Acta del Comité de Transparencia *08/CT/18-ORD/2024* que la confirma. Así como dos oficios suscritos por el Director de Servicios Públicos y de Sustentabilidad Ambiental quienes declinan su competencia para conocer de la solicitud de información por no contar con facultades y atribuciones al respecto.
2. Seguidamente el día **veinticuatro del mismo mes y año**, se emitió respuesta a la solicitud de información *00608/TLALNEPA/IP/2024*, a través del archivo *RESPUESTA SAIMEX 00608.zip*, que a su vez contienen los Acuerdos de Reserva de la Información *02/CT/11-ORD-2024* y *06/CT/11-ORD-2024* en el que se confirma la reserva de la información propuesta por el servidor público habilitado y, un Oficio suscrito por el Tesorero Municipal quien somete a consideración del Comité de Transparencia, la reserva de la información solicitada.
3. Por otro lado, en fecha **doce de diciembre de dos mil veinticuatro**, se emitió respuesta a la solicitud de información 01146/TLALNEPA/IP/2024, a través del archivo denominado *RESP DESARROLLO URBANO 3350.pdf*, cuyo contenido corresponde a dos oficios; el primero signado por el Director de Desarrollo Social Urbano, quien expone que luego de una búsqueda exhaustiva y razonable, no obra lo solicitado en sus archivos y, un oficio signado por el Subdirector de Tenencia de la Tierra y Asuntos Metropolitanos, quien refiere que deberá solicitarse el Acuerdo solicitado al Tribunal Agrario Distrito 10, por obrar en sus archivos.
4. Los días **cinco y catorce de junio y, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro**, el solicitante interpuso recurso de revisión en las solicitudes de informaciónobjeto de la presente acumulación, señalando en todos los recursos de revisión, las siguientes razones o motivos de inconformidad:

**Folio del recurso de revisión: 03498/INFOEM/IP/RR/2024**

**ACTO IMPUGNADO**

*“Se clasifica como reservada la información publica solicitada amparándose en el articulo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica que a la letra dice ; "Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;”*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“Amparándose en el articulo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica que a la letra dice ; "Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; el sujeto obligado clasifica ilegalmente la información publica solicitada. Información publica que de conformidad con el articulo 112 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica no debería de ser clasificada como reservada, porque actualmente se esta violando el derecho humano a un medio ambiente sano y el Estado debe garantizar el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Que se ha venido causando daños al medio ambiente en la operación de este relleno sanitario que debe ser convertido a centro integral de residuos, según sellos de clausura números ; 10045/2021, 10046/2021, 10047/2021, 10048,/2021, 10049/2021 y 10050/2021 emitidos por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México en el año 2021. También se encuentra una carpeta de investigación NIC FRM/FRM/02/MPl/184/00066/21/10 por delitos graves de corrupción. Es de señalarse la grave omisión del director de sustentabilidad ambiental del ayuntamiento municipal de Tlalnepantla al no asumir las responsabilidades que se le señalan en el articulo 385 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.”*

**Folio del recurso de revisión: 03638/INFOEM/IP/RR/202**

**ACTO IMPUGNADO**

*La clasificación de la información publica solicitada*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“El sujeto obligado clasifica inadecuadamente la información publica solicitada violentando los artículos 6, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También incumple el sujeto obligado el articulo 108 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su párrafo que a la letra dice; "análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.", también incumple los artículos; 109, 113, 114 y 115 fracción II de la Ley en comento.”*

**Folio del recurso de revisión: 00033/INFOEM/IP/RR/2025**

**ACTO IMPUGNADO**

*“Se me niega la información publica solicitada, declarando la inexistencia del documento solicitado”*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“Mediante el oficio No. DDU/3350/2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, el C. Director de Desarrollo Urbano omite lo señalado en los articulo; 10 fracciones I, XII, XV y XXII además del 311 fracción IV del REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, publicado en la Gaceta oficial del Ayuntamiento de Tlalnepantla, México, número 10 de fecha 22 de febrero de 2022, que a la letra dice; “Suscribir acuerdos, convenios y contratos con dependencias y entidades, así como con particulares, en el ámbito de sus atribuciones y competencias;” El subdirector de Tenencia de la Tierra y Asuntos Metropolitanos mediante el oficio DDU/STTyAM/141/2024 de fecha 6 de diciembre de 2024, reconoce “que se firmo un documento, que contiene una serie de acciones a realizar,…” agregando que dicho documento no obra en los archivos de la subdirección de Tenencia de la Tierra y Asuntos Metropolitanos. El documento que menciona el subdirector es un CONVENIO, el cual se adjunta a este recurso de revisión, que al haber firmado rebaso sus facultades y obligaciones establecidas en el artículo 321 del Reglamento en comento, además de haber ejercido la función pública de los integrantes del Ayuntamiento de Tlalnepantla al darle vigencia actual al “Programa Seguridad del Patrimonio Familiar” acordado en el punto 4 del orden del día de la décima cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlalnepantla, México celebrada el 23 de mayo de 2019 y que de conformidad con el respectivo CONVENIO DE CONCERTACION firmado por las autoridades municipales de ese entonces con el comisariado ejidal del ejido de San Juan Ixhuatepec, tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. Se adjuntan documentos que avalan lo manifestado en este recurso de revisión.”*

1. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través de los **acuerdos de admisión** de fechas **siete y dieciocho de junio de dos mil veinticuatro y, treinta y uno de enero de dos mil veinticinco**, pusieron a disposición de las partes los expedientes electrónicos vía SAIMEX a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos según corresponda al caso concreto, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
2. Posteriormente en fecha **diecinueve de febrero** **de dos mil veinticinco**; se ordenó la acumulación de los recursos de revisión de mérito, a efecto de que seformulará y presentará el proyecto de resolución correspondiente de manera unificada, de conformidad con el numeral ONCE incisos b) y c) de los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como de los Recursos de Revisión que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia Estatal*[[1]](#footnote-1)*, que señala:

***“ONCE.*** *El Instituto, para mejor resolver y evitar la emisión de resoluciones contradictorias, podrá acordar la acumulación de los expedientes de recursos de revisión, de oficio o a petición de parte cuando:*

*…*

*b) Las partes o los actos impugnados sean iguales*

*c) Cuando se trate del mismo solicitante, el mismo SUJETO OBLIGADO, aunque se trate de solicitudes diversas;*

*(…)”*

1. Es así que,resulta conveniente su trámite de forma unificada para mejor resolver y evitar la emisión de resoluciones contradictorias, por ello resultó procedente que este Órgano Garante realizará la acumulación respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria, en términos del artículo 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, que a la letra señalan:

***Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.***

***“Artículo 18.-*** *La autoridad administrativa o el Tribunal acordarán la acumulación de los expedientes del procedimiento y proceso administrativo que ante ellos se sigan, de oficio o a petición de parte, cuando las partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo conducente, para la separación de los expedientes.”*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

***“Artículo 195.*** *En la tramitación del recurso de revisión se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.”*

(Énfasis añadido)

1. De lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** rindió informe justificado a los Recurso de Revisión de mérito en el mismo sentido mediante los siguientes archivos:

**Folio Solicitud: 00503/TLALNEPA/IP/2024**

**Folio Recurso de Revisión: 03498/INFOEM/IP/RR/2024**

**MANIFESTACIONES.zip,** archivo comprimido que contiene a su vez cuatro archivos que corresponden al Acuerdo de Reserva de Información 0002/CT/O7-ORD/2022, mediante el cual se somete a clasificación los informes requeridos en la solicitud de referencia por estar sub judice; oficio signado por el Director Jurídico en el que propone la clasificación de la información requerida; oficio signado por el Director de Servicios Públicos en el grosso modo señala no contar con atribuciones para atender la solicitud de información; oficio signado por el Director de Sustentabilidad Ambiental mediante el cual informa confirma la reserva de la información de acuerdo a lo informado por la Dirección Jurídica.

**Folio Solicitud: 00608/TLALNEPA/IP/2024**

**Folio Recurso de Revisión: 03638/INFOEM/IP/RR/2024**

**MANIFESTACIONES.zip,** oficio comprimido que a su vez contiene cinco archivos que corresponden al Acuerdo de Reserva de Información 0002/CT/O7-ORD/2022, mediante el cual se somete a clasificación los informes requeridos en la solicitud de referencia por estar sub judice (repetido dos veces); oficio signado por el Director Jurídico en el que propone la clasificación de la información requerida; oficio signado por el Director de Servicios Públicos en el grosso modo señala no contar con atribuciones para atender la solicitud de información; oficio signado por el Director de Tesorero Municipal en el que propone la *reserva total.*

**Folio Solicitud: 01146/TLALNEPA/IP/2024**

**Folio Recurso de Revisión: 00033/INFOEM/IP/RR/2025**

**Manifestaciones RR33.pdf**, que contiene un oficio signado por la Coordinadora de Tenencia de la Tierra y Control del Crecimiento Urbano, en el que confirma su respuesta inicial la cual versaba en la no localización de lo solicitado previa búsqueda exhaustiva y razonable; oficio signado por el Director de Transformación Urbana en el que expone que no existe en su área ningún Convenio con el nombre y concepto referido en la solicitud de información.

1. Por su parte, el particular realizó manifestaciones al Recurso de Revisión **03638/INFOEM/IP/RR/2024**, alegando de manera general lo siguiente: "*los 2 acuerdos presentados de reserva total contienen violaciones graves a las leyes de transparencia la general y la particular del estado de mExico por ejemplo violentan el articulo 108 de la Ley general de analizar caso por caso de la solicitud de informacion publica por mi solicitada, segundo en el acuerdo 06/CT/11-ORD/2024 la contraloria interna invade competencias de investigacion y sustentacion del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico por tratarse de un falta grave y pudiese estar incurriendo en obstruccion de la justocoa. Faltas paredcidas se cometen en el acuerdo 02/CT/11-ORD/2024 al no analizar caso por caso y no contemplar que solo en 4 contratos de solicitados pudiese aplicarse alguno de los argumento de reserva pero no en los 7 contratos que estoy solicitando"*; asimismo adjunta un estado de cuenta del Banco Accendo.
2. El veinte de febrero del año en curso, se amplió el término para resolver el Recurso de Revisión por un periodo de quince días hábiles adicionales al lapso ordinario. Al respecto este Organismo Garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

1. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra justificado en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
2. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
3. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
4. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.*

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.*

1. Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. Finalmente, la Comisionada Ponente mediante acuerdo de fecha **diecinueve de febrero de** dos **mil veinticinco**, decretó el cierre de instrucción de los expedientes, por lo que no habiendo más que hacer constar, y -----------------------------------------------------------------

# C O N S I D E R A N D O

# PRIMERO. De la competencia

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios..

## SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.

1. Este Órgano Garante considera que los medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia toda vez que: los recursos fueron presentados dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; asimismo no se tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia.
2. Por otro lado, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

## TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.

1. Se solicitó tener acceso, a la información que a continuación se desagrega:

**Con relación al “Proyecto de Rehabilitación del Sitio de Disposición Final** de **Residuos Sólidos de Tlalnepantla a Centro Integral de Residuos”:**

* Segundo informe semestral del año 2021 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Informe anual del año 2021 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental en comento.
* Primer informe semestral del año 2022 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Segundo informe semestral del año 2022 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Informe anual correspondiente al año 2022 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental.
* Primer informe semestral del año 2023 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Segundo informe semestral del año 2023 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Informe anual del año 2023 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental.
* Contrato o los contratos y de existir sus anexos, celebrados con Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple para los números de cuenta siguientes:

Cuenta: 001035140111, CLABE: 102180010351401111

Cuenta: 001035140154, CLABE: 102180010351401548

Cuenta: 001035140120, CLABE: 102180010351401205

Cuenta: 001035140138, CLABE: 102180010351401386

Cuenta: 001035140146b, CLABE: 102180010351401467

Cuenta: 001035140014, CLABE: 102180010351400141

Cuenta: 001035140103, CLABE: 102180010351401030

* Copia certificada con costo del Convenio de fecha 23 de noviembre de 2023, celebrado entre el Presidente del Comisariado Ejidal del poblado de San Juan Ixhuatepec, comisariados ejidales de dicho poblado, jurídico de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México y el Subdirector de la Subdirección de Tenencia de la Tierra y Asuntos Metropolitanos.

1. En respuesta el **SUJETO OBLIGADO** remitió los archivos ya descritos en el anterior Párrafo 2. Inconforme con la respuesta, el ahora **RECURRENTE** argumentó la negativa de la información y la inadecuada clasificación de la información.
2. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en este recurso se circunscribe a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, **fracciones I y II** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de** México **y Municipios**; fracciones que determinan las hipótesis jurídicas relativas a la negativa de la información ya la clasificación de la información; contextos de los cuales se dolió **EL RECURRENTE** al momento de interponer su inconformidad. De modo tal que los presentes recursos de revisión se abocaron en determinar si el **SUJETO** **OBLIGADO** con sus respuestas ciertamente actualizan las causales de procedenciaantes señaladas.

## CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.

1. Acotado lo anterior, se procede analizar, en primer lugar, si el **SUJETO OBLIGADO** al atender la solicitud de acceso a la información, satisfizo la garantía primaria del derecho según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en segundo término si cumplió con su deber de respetar y garantizar el derecho, entregando la información solicitada. En ese contexto para efecto de análisis se realizará de manera separada por recurso de revisión acumulado.

**Folio Solicitud: 00503/TLALNEPA/IP/2024**

**Folio Recurso de Revisión: 03498/INFOEM/IP/RR/2024**

1. Del primer recurso objeto de acumulación se desprende que se solicitó información relacionada al “Proyecto de Rehabilitación del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos de Tlalnepantla a Centro Integral de Residuos”, a saber:

* Segundo informe semestral del año 2021 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Informe anual del año 2021 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental en comento.
* Primer informe semestral del año 2022 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Segundo informe semestral del año 2022 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Informe anual correspondiente al año 2022 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental.
* Primer informe semestral del año 2023 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Segundo informe semestral del año 2023 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental, enviado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto ambiental.
* Informe anual del año 2023 de cumplimiento de las condicionantes de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental.

1. A lo anterior recayó una respuesta de clasificación por reserva de la información por estarse sustanciando el juicio administrativo **número 1047/2021** en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, radicado en la Primera Sala Regional de Toluca de fecha de inicio del 22 de noviembre de 2021, promovido por el Municipio de Tlalnepantla de Baz.
2. En ese sentido, se argumentó de la prueba de daño generada para tal efecto, que dar a conocer lo solicitado puede crear un riesgo a la administración de justicia, a las partes o al propio proceso jurisdiccional, ocasionando un perjuicio significativo al interés público.
3. De lo anterior se desprenden diversos aspectos, el primero de ellos que el **SUJETO OBLIGADO** asume de manera expresa que cuenta en sus archivos con la totalidad de los informes que se le solicitan, tan es así que se enlistan en su totalidad y se someten a un proceso de clasificación.
4. Ahora bien, la causal de clasificación corresponde a que se encuentra un procedimiento en trámite, al respecto en la ya referida prueba de daño no se evalúa el impacto potencial que tendría la divulgación de dicha información; si bien es cierto se hace mención a que puede causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante y que se puede vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes.
5. Sin embargo, ellos corresponden a los supuestos ya establecidos en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y que son los que deberán desarrollar los sujetos obligados debiendo valorar el daño que causaría la divulgación de la información, con la finalidad de sustentar la reserva y arribar a una determinación debidamente fundada y motivada que tenga como consecuencia la clasificación de la información, además de analizar si el periodo de clasificación resulta acorde con la naturaleza de la información requerida **no bastando con sólo citarlos o parafrasearlos.**
6. En otras palabras, la determinación que confirme una clasificación debe contener un análisis exhaustivo de los elementos de forma y fondo que establecen los artículos 122, 125, 128, 129, 130, 131, 132 fracción II, 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.
7. En esta perspectiva, el Acuerdo de Clasificación de Información tiene como propósito primordial **que los particulares conozcan de manera completa las condiciones y circunstancias que determinaron negar el acceso a la información**; a través de la adecuada fundamentación y motivación de la clasificación de información, que incluya la prueba de daño a fin de establecer el perjuicio que podría provocar la entrega de la información, toda vez que los artículos 128 y 129 de la Ley de la Materia, disponen que para que los sujetos obligados puedan invocar una causa se deberá fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño, en la cual **se justifique que la divulgación de la información representa un riesgo real demostrable e identificable al superar el interés público de que se difunda atendiendo al principio de proporcionalidad y el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio**.
8. Al respecto, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen en su numeral Trigésimo Tercero que, para la aplicación de la prueba de daño los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

*"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:*

*I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;*

*II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados* ***deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva****;*

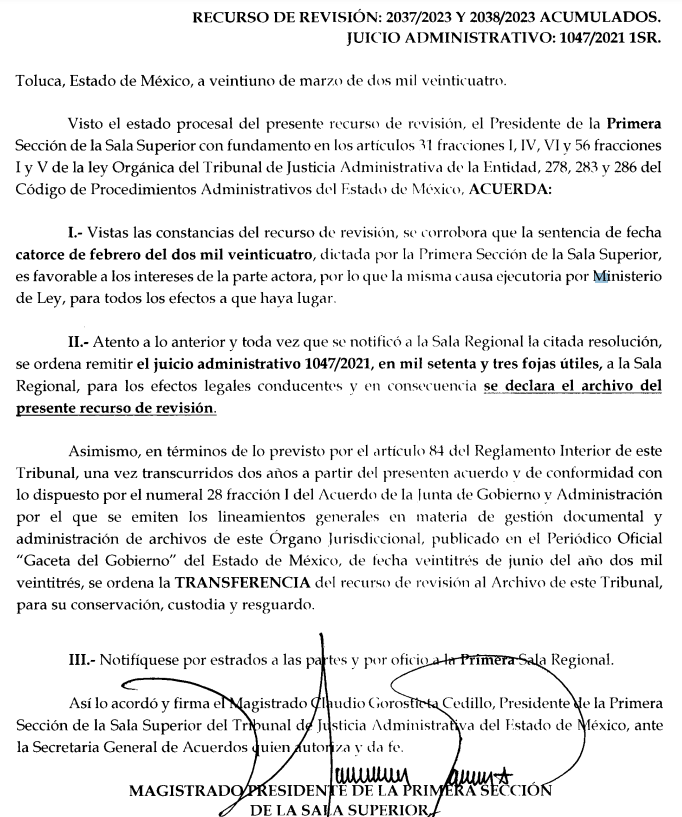
*III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;*

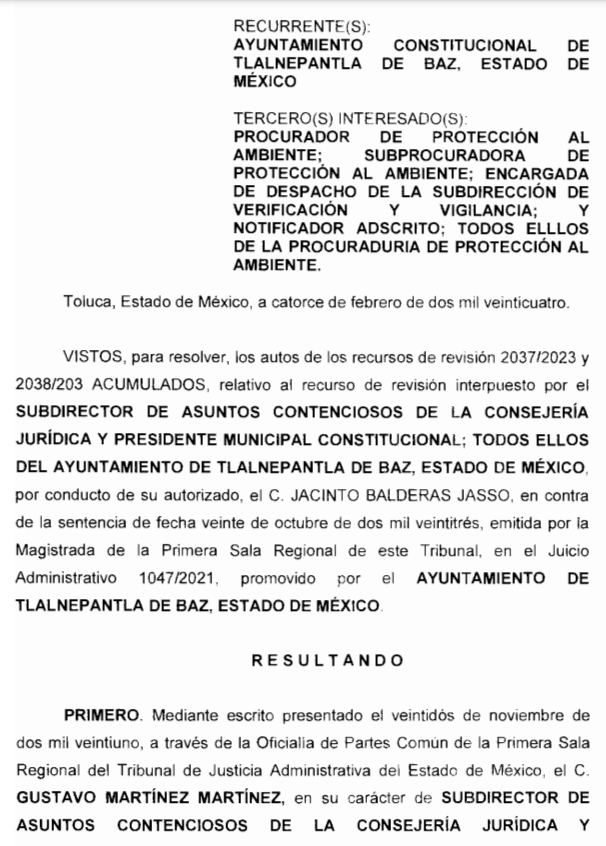
*IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;*

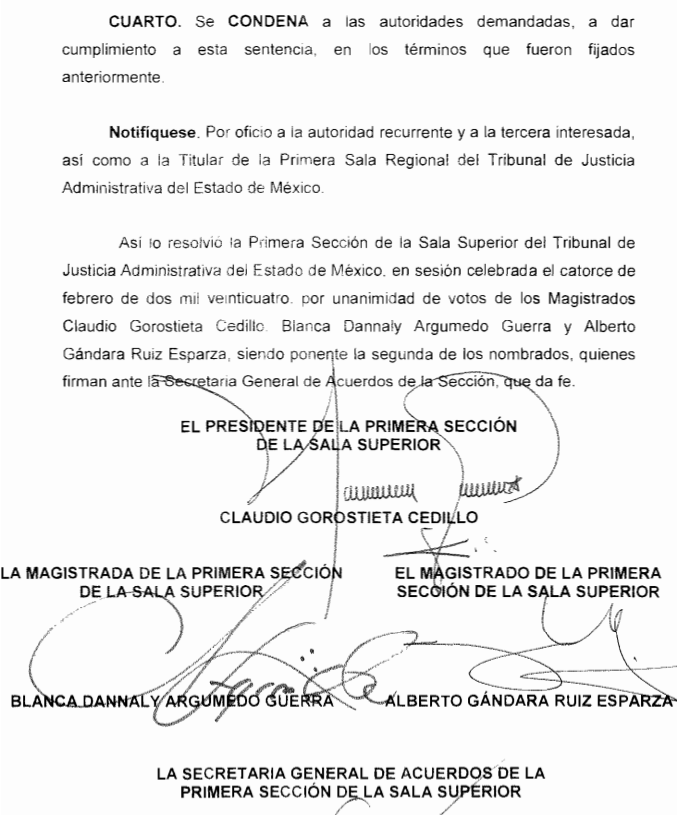
*V. En la motivación de la clasificación,* ***el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño****, y*

*VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá inte1ferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."(Sic)*

1. En conclusión, para convalidar la clasificación como información reservada, **se debe efectuar el** estudio **de clasificación a la luz de los elementos que exigen los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y efectuar un análisis exhaustivo en todos aquellos casos que restrinjan el derecho de acceso a la información de los particulares**, como es la figura de la clasificación de la información para verificar que se acredita la prueba de daño. Contexto que se insiste, del caso concreto no se materializó.
2. Sumado a lo anterior, se advierte que el soporte documental solicitado, dada su propia especial naturaleza, no es susceptible de ser clasificado, ya que si bien no se duda que se encuentra *sub judice*; también lo es que al tratarse de informes ya generados y entregados por el Ayuntamiento, corresponden a documentos definitivos.
3. Documentos que corresponden a archivos, registros o bien, un informe como se desprende del caso concreto, que se consideran finales, completos y autorizados, y que no está sujeto a cambios adicionales, como resultado de un proceso de revisión, edición y aprobación, y se utilizan como versión oficial (en el caso de mérito), tan es así que ya le fueron remitidos a la Dirección General De Ordenamiento e Impacto Ambiental; más aún, ya se encuentran inmersos en un procedimiento, de lo que se colige con claridad que ya no son susceptibles de sufrir modificación alguna y tienen el carácter de oficial, por lo que su difusión no afecta ningún trámite o procedimiento.
4. Por otro lado, es innecesario abundar en la causal de reserva invocada; ya que si bien se refirió este Instituto no está facultado para dudar de la veracidad de las respuestas que emiten los sujetos obligado, también lo que luego de la búsqueda de indicios por parte de la Ponencia Resolutora, se advirtieron documentales que dan cuenta de que el procedimiento a que hace alusión el **SUJETO OBLIGADO**, se encuentra concluido, como se desprende de las siguientes constancias:







1. Luego entonces, si la solicitud de información ingreso el veintitrés de abril del año en curso, causo ejecutoria poco más de un mes antes, lo cual implica que ya no puede ser impugnada o recurrida mediante los medios ordinarios de defensa legal, es decir la sentencia se ha vuelto definitiva y es obligatoria para las partes involucradas, con lo que resulta evidente que la causal de reserva invocada se extinguió, suponiendo sin conceder fuera procedente ya que -se insiste-, nos encontramos ante una solicitud de información que versa respecto de documentos definitivos.
2. A más de lo anterior, derivado de su naturaleza, se colige que no corresponden a informes que contengan información sensible que justifique su clasificación toda vez que relacionado al derecho humano a un medio ambiente sano, ello conforme al “Acuerdo de Escazú”.
3. Que corresponde a un tratado internacional pionero en América Latina y el Caribe que tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
4. Su nombre oficial es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y fue adoptado en Escazú, Costa Rica; de sus principales disposiciones destaca al caso concreto la de los Estados que deben garantizar que la información ambiental esté disponible y sea accesible para el público.
5. Luego entonces, el Acuerdo de Escazú es un instrumento histórico que busca fortalecer los derechos ambientales al garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, así como proteger a los defensores ambientales, por lo que su implementación efectiva requiere el compromiso no solo de los gobiernos, sino de los órganos garantes que tutelan el derecho humano de acceso a la información pública.
6. Así, al ser el Acuerdo de Escazú es un instrumento histórico que busca fortalecer los derechos ambientales y garantizar el acceso a la información, firmado por 24 de américa latina países y ratificado por 15, de lo que se incluye a México, es un instrumento vinculante al cual se debió dar observancia toda vez que obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
7. En ese sentido, la entrega de la información solicitada resulta relevante ya que desde el año 2018, México se adhirió al Acuerdo de Escazú, que al ser un instrumento vinculante, obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información en **asuntos ambientales**, lo anterior bajo los principios de igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, no regresión y progresividad, buena fe, preventivo, precautorio, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los Estados y el principio *pro persona*.
8. Principio que en materia de acceso a la información pública corresponde a un mandato fundamental en virtud que el derecho de acceso a la información pública está reconocido como un derecho humano fundamental; este principio, también conocido como principio *pro homine*, establece que, en caso de duda o conflicto en la interpretación de normas, debe prevalecer aquella que maximice la protección de los derechos humanos y favorezca de manera más amplia a las personas.
9. Por otro lado, respecto del derecho humano al medio ambiente, se entiende que es el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a vivir en un entorno sano, seguro y equilibrado; este derecho implica la protección y conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, y es esencial para el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, el agua y la alimentación.
10. El Reconocimiento del Derecho Humano al Medio Ambiente fue formalmente reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 mediante la Resolución 48/13, que establece el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, este hito representa un avance en el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos y la protección ambiental a nivel internacional.
11. En esa tesitura, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que no podrá invocarse el carácter de reservado en las siguientes circunstancias:

*Artículo 142. Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:*

***I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos, calificada así por autoridad competente;***

***II. Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;***

*III. Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.*

1. Como se desprende de las primeras dos fracciones, el carácter de reservado no podrá invocarse cuando se trate sobre violaciones graves de derechos humanos, incluso si aún no hay un pronunciamiento previo de la autoridad competente, y se determina que dichas violaciones tienen trascendencia social.
2. En esa posición, como se advierte del caso concreto al tratarse de un asunto en trámite, el carácter de reservado se considera que no puede invocarse para restringir el acceso a la información cuando se trate de investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos como lo es al medio ambiente sano, incluso en los casos en que aún no exista un pronunciamiento de una autoridad competente, esta disposición busca garantizar el derecho a la verdad y la transparencia en asuntos de derechos humanos, especialmente cuando se identifican violaciones con trascendencia social, como lo son los derechos humanos al medio ambiente.
3. De ahí que se considere que existen además investigaciones a violaciones del derecho humanos al medio ambiente, un interés público el cual se refiere al derecho de la sociedad a acceder a información relevante para la vida pública, especialmente cuando dicha información tiene impacto directo en el bienestar y los derechos humanos. En este contexto, el interés público es un principio que guía las políticas de **transparencia y acceso a la información** en temas que afectan a la colectividad, promoviendo la rendición de cuentas, la prevención de actos de corrupción, y una mayor confianza en las instituciones.
4. Sobre dicha situación, la propia ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 3°, fracción XXII, precisa que es información de interés público, aquella que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo las instituciones públicas.
5. Conforme a lo anterior, en el presente caso, resulta evidente que existe un interés público de dar a conocer lo solicitado, pues la información permitiría a la ciudadanía verificar el actuar de las autoridades respecto del proyecto que se ejecuta; además, que este Organismo Garante cuenta con facultades para pronunciarse sobre “posibles violaciones graves a derechos humanos”, pero esto, únicamente impacta en ejercicio del acceso a la información pública y no decide otra clase de derechos. Lo anterior como apunte final, sin perder de vista que el motivo principal del cual resulta procedente desestimar la clasificación de la información, revocar la respuesta y ordenar su entrega es porque corresponden a documentos definitivos no susceptibles de ser clasificados.

**Folio Solicitud: 00608/TLALNEPA/IP/2024**

**Folio Recurso de Revisión: 03638/INFOEM/IP/RR/2024**

1. Posteriormente surge el Recurso de Revisión indicado, en el cual se solicitaron, los contratos y de ser el caso los anexos, celebrados entre el Ayuntamiento y una institución bancaria, refiriendo para tal efecto los números de cuenta de los cuales se requieren los contratos.

1. Cuya respuesta versó en el mismo sentido de igual manera por encontrarse en trámite un, con motivo del expediente integrado en la Carpeta de Investigación número CI-FIEDF/T/UI-1S/D/1339/09-2022, respecto de la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delitos de parte de la institución de banca, de la cual se señala contiene un escrito inicial y trece oficios cuyo número se enlista toda vez que se refiere encuadran en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo cual no puede ser entregada.
2. Para tal efecto, se desarrolló una pretendida prueba de daño, que al igual que en el supuesto anterior, no se demostró un riesgo, real, demostrable e identificable; sino que fueron vertidos los supuestos previstos en la propia ley, lo que resulta improcedente conforme a lo anteriormente señalado y que se tiene por reproducido en para el rubro de mérito en obvio de repeticiones innecesarias; adicional a que se refiere que se puede ocasionar daños a la hacienda pública municipal.
3. Lo que resulta improbable; toda vez que el daño a la hacienda pública se refiere a cualquier acción u omisión que cause un perjuicio económico al patrimonio del Estado o de las entidades públicas y, está relacionado con conductas que afectan los recursos financieros, bienes o intereses del sector público, ya sea a través de fraudes, malversación de fondos, evasión fiscal, corrupción u otras prácticas ilícitas.
4. En ese contexto, tener acceso a los contratos celebrados para la apertura o creación de una nueva cuenta bancaria, no puede contribuir a un daño de la hacienda pública, pues este documento corresponde únicamente al instrumento legal celebrado entre una entidad financiera (el banco) y un cliente (Ayuntamiento) que establece los términos y condiciones bajo los cuales se regirá la relación entre ambas partes, definiendo los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada uno, así como las características específicas de la cuenta que se apertura.
5. **En todo caso,** el uso, acciones u omisiones que se generen con posterioridad por las partes o terceras personas, con dichas cuentas son las que pueden generar daños a la hacienda pública, no así los contratos. Asimismo, los contratos corresponden a instrumentos legales que ya fueron consumados, tan es así que los números de cuenta se generaron; luego entonces corren la misma suerte de documentos definitivos como se expresó en el Recurso anterior.
6. Por tal motivo es que se considera dable ordenar su entrega; en virtud que el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, **contratos**, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares,* ***contratos****, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”* (Énfasis añadido)

1. Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

*“****CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. De ahí que el Sujeto Obligado cuenta con el deber de satisfacer las solicitudes de acceso a la información que le sean formuladas y entregar la información pública que obre en sus archivos; más aún si la misma se trata de información pública de oficio la cual se relaciona con aquella que se genere de acuerdo con sus facultades, atribuciones señaladas por la Ley en la materia, así como de interés público, es decir, aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados .
2. Asimismo, el **SUJETO OBLIGADO**, para dar cabal atención a la solicitud de información deberá hacer entrega de ser el caso que existan los anexos por ser solicitados de manera expresa, ya que sumado a lo anterior ha sido criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) que los anexos se consideran parte del documento y deben ser entregados, sirve de apoyo a lo anterior el Criterio 20-10 y 17/17 que son del tenor literal siguiente:

***“Criterio 20/10***

***Los anexos son parte integral del documento principal.*** *Cuando un documento gubernamental contiene anexos éstos se consideran parte del documento, ya que a partir de él se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con la materia del mismo. En esta tesitura, ante solicitudes de información relacionadas con documentos que incluyen anexos, particularmente en aquellas que no aludan expresamente a estos últimos, las dependencias y entidades deberán considerar que las mismas refieren a los documentos requeridos, así como a los anexos correspondientes, salvo que el solicitante manifieste su deseo de acceder únicamente al documento principal.”*

***“Anexos de los documentos solicitados.*** *Los anexos de un documento se consideran parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal.”*

1. De lo anterior se desprende que ciertamente es información susceptible de ser entregada al ser una parte esencial del documento principal, ya que proporcionan información detallada y de apoyo que complementa; cuya inclusión garantiza que el documento sea completo, preciso y útil para el solicitante.

**Folio Solicitud: 01146/TLALNEPA/IP/2024**

**Folio Recurso de Revisión: 00033/INFOEM/IP/RR/2025**

1. Finalmente, sobreviene el Recurso indicado, en el cual se solicita la copia certificada con costo de un Convenio, al cual recayó una respuesta inicial, en donde se aceptó la celebración del convenio solicitado; toda vez que se señaló que si se realizó una reunión de trabajo en la que participaron las personas señaladas en la solicitud de información, así como también por quien entonces fungía como Magistrada del Tribunal Agrario Distrito 10, lugar donde se llevó a cabo la firma del documento, no obstante se refiere que en los archivos de la Subdirección de la Subdirección de Tenencia de la Tierra y Asuntos Metropolitanos, no obra dicha documental.
2. Respuesta que fue robustecida de manera posterior en la etapa de manifestaciones en donde el confirmando la no localización del documento de referencia y agregando que tomando en consideración que es un hecho que aconteció en la administración 2022-2024, no se cuenta con elementos suficientes para argumentar la existencia del mismo, invocando la figura denominada hechos negativos.
3. De cuya respuesta se inconforme el particular, sin embargo de su escrito recursal, se desprende que realiza una serie de argumentos que pudieran ser considerados como una queja o denuncia, como se observa:

*“…*

*El documento que menciona el subdirector es un CONVENIO, el cual se adjunta a este recurso de revisión, que al haber firmado* ***rebaso sus facultades y obligaciones establecidas en el artículo 321 del Reglamento en comento****,* ***además de haber ejercido la función pública de los integrantes del Ayuntamiento de Tlalnepantla al darle vigencia actual al “Programa Seguridad del Patrimonio Familiar” acordado en el punto 4 del orden del día de la décima cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlalnepantla, México celebrada el 23 de mayo de 2019 y que de conformidad con el respectivo CONVENIO DE CONCERTACION firmado por las autoridades municipales*** *de ese entonces con el comisariado ejidal del ejido de San Juan Ixhuatepec, tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. Se adjuntan documentos que avalan lo manifestado en este recurso de revisión.”*

1. Al tiempo que adjunta el Convenio solicitado inicialmente. Al respecto, las manifestaciones vertidas por el particular en calidad de **RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**, para efecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, son consideradas subjetivas.
2. Al respecto, las manifestaciones subjetivas son expresiones, percepciones o interpretaciones que reflejan la perspectiva personal, emocional o individual de una persona, a diferencia de las manifestaciones objetivas, que se basan en hechos verificables y medibles, las manifestaciones subjetivas están influenciadas por las experiencias, sentimientos, opiniones y contextos personales de quien las expresa.

68. Luego entonces al ser estas manifestaciones propias del ámbito interno de cada individuo y que sumado a que este Instituto no es competente para verificar o emitir un pronunciamiento respecto de los argumentos vertidos por el ahora **RECURRENTE,** lo dable al Recurso de mérito, es sobreseer por improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia enunciada en el artículo 191 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; situación que trae aparejado el sobreseimiento, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 192, fracción IV, de la Ley en la materia, a saber:

*“Artículo 191. El recurso será desechado por improcedente cuando:*

*…*

*III. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;*

*…*

*Artículo 192. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen*

*alguno de los siguientes supuestos:*

*…*

*IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley; y*

*…”*

**69.** Sirve como criterio orientador, lo establecido en la Jurisprudencia 1ª./J 3/99 de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en lo conducente dispone:

***“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.*** *De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente…”*

**70.** Por ello, en términos del artículo 191 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Órgano Garante considera procedente **SOBRESEER** el presente recurso de revisión, toda vez que se actualiza la fracción IV del artículo 192 del citado ordenamiento legal.

**71.** Con la determinación anterior, se estima quedará por colmado el derecho de acceso a la información del ahora Recurrente; toda vez que el Derecho que tutela este Órgano Garante corresponde a la *igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[2]](#footnote-2) en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los* poderes *Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,* fideicomisos*, y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal*[[3]](#footnote-3)que se constituye como una herramienta fundamental para *ejercer control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas,[[4]](#footnote-4)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública[[5]](#footnote-5)* que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.[[6]](#footnote-6)* ”

**72.** Para entender los alcances de la información pública se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***“CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

**73.** Es así que, todos los actos de autoridad que realicen los Sujetos Obligados **deben** estardocumentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.

**74.** Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12 (antes transcrito), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***“Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información*** *generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o* ***en posesión de los sujetos obligados es pública*** *y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.”*

**75.** Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[7]](#footnote-7) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.

**76.** Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899.

***“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. “*

## QUINTA. De la versión pública

**77.** Una vez expuesto lo anterior es necesario referir que el sujeto obligado en todo momento debe proteger los datos que puedan poner en riesgo la vida o integridad de las personas y de los servidores públicos de los que se habrá de hacer entrega de sus datos personales, por tal motivo es susceptible de ser entregada a través del SAIMEX, en versión pública.

**78.** Por ende deberá emitir la debida clasificación de información, en la que dé seguridad jurídica al solicitante que por alguna excepción establecida en Ley no es posible acceder temporalmente a la información referida anteriormente, para así no dejar en estado de indefensión y exista certeza jurídica de lo expuesto por el sujeto obligado.

**79.** La **versión pública** el Sujeto Obligado deberá argumentar que la liberación de la información pueda amenazar el interés protegido por la ley, es decir esgrimir ideas jurídicas en el cual se evidencie la amenaza del daño o alteración al procedimiento que aduce el sujeto obligado, amparado de razones, y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto en la norma legal invocada como fundamento, específicamente como lo hizo valer en su respuesta, empero por la aplicabilidad de la Ley de Transparencia en la materia deberá clasificarla por la hipótesis análoga siendo aplicables los numerales de la Ley de la materia, que a la letra esgrimen:

***Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:***

***[…]***

***IX. Datos personales: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;***

***[…]***

***XLV. Versión pública: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.***

*Artículo 122. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.*

*[…]*

*Artículo 132. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

*[…]*

***III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.***

***Artículo 137. Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.***

**80.** De la interpretación sistemática de los artículos citados, se advierte que el Sujeto Obligado debe realizar la debida reserva de la información por seguir en trámite el procedimiento aludido, siguiendo los requisitos expuestos:

1. ***La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;***
2. ***El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y***
3. ***La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.***

**81.** Requisitos que deben estar acompañados de la debida fundamentación y motivación, cobrando aplicación lo que señala la jurisprudencia de la novena época visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis I.4o.A.J/43 (9a.) bajo el número de registro 175082 cuyo rubro y texto esgrime;

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.***

*El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo*[*16 constitucional*](about:blank)*relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción”*

**82.** Asimismo de los dispositivos legales citados, se desprende que el derecho de acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados estén protegidos, quienes deberán adoptar las medidas de seguridad administrativa, física y técnica necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad todo tratamiento de datos personales que efectúen los Sujetos Obligados deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 14 con relación con el 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

**83.** De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares y de los servidores públicos.

**84.** Así, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, señalan con claridad cuáles son aquellos datos personales que deben ser clasificados al momento de la elaboración de las versiones públicas.

**85.** Efectivamente, cuando se clasifica información como confidencial o reservada es deber someterlo al Comité de Información, quien debe confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al Sujeto Obligado a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

**86.** No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los **Sujetos Obligados** serán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. El área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad qué datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

**87.** Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas, asimismo que si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.

**88.** Lo anterior a colación del eventual procesamiento que se pretende, ya mencionado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

# R E S O L U T I V O S

**PRIMERO**. Resultan parcialmente fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en los Recursos de Revisión**03498/INFOEM/IP/RR/2024 y 03638/INFOEM/IP/RR/2024** acumulados,en términos de los **Considerandos** **CUARTO** **y QUINTO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICAN** las respuestas emitidas por el **Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz** a las solicitudes de información **00503/TLALNEPA/IP/2024** y **00608/TLALNEPA/IP/2024** a efecto de **ORDENAR** entregar vía Sistema de Accesos a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, de ser el caso en versión pública, la siguiente información:

1. **Del “Proyecto de Rehabilitación del Sitio de Disposición Final** de **Residuos Sólidos de Tlalnepantla a Centro Integral de Residuos”, los siguientes informes de cumplimiento de las condicionantes de la autorización en materia de impacto ambiental:**

* **Informe Anual y Segundo Informe Semestral del año 2021**
* **Primer y Segundo Informe Semestral del año 2022**
* **Informe Anual del año 2022**
* **Primer y Segundo Informe Semestral del año 2023**
* **Informe Anual del año 2023**

1. **Contrato o contratos y de ser el caso sus anexos; celebrados entre el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y Accendo Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, al 7 de mayo de 2024, para los números de cuenta referidos en la solicitud de información 00608/TLALNEPA/IP/2024.**

Para la entrega en versión pública deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición del recurrente.

**TERCERO**. Se **SOBRESEE** el Recurso de Revisión número **00033/INFOEM/IP/RR/2025**, por actualizarse la causal de improcedencia inmersa en la fracción III, del artículo 191, de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, en términos del considerando **CUARTO** de la presente Resolución.

**CUARTO. Notifíquese** vía SAIMEX la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**QUINTO. Notifíquese** a **EL RECURRENTE** la presente Resolución vía SAIMEX.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de **EL RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnar vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SÉPTIMO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS RECURSOS Revisión 03498/INFOEM/IP/RR/2024 y 03638/INFOEM/IP/RR/2024 Y POR MAYORÍA DE VOTOS EL RECURSO 00033/INFOEM/IP/RR/2025, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO DISIDENTE EN EL RECURSO 00033/INFOEM/IP/RR/2025; EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISÉIS (26) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Emitidos por este Instituto y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del Gobierno” en fecha treinta de octubre de dos mil ocho. [↑](#footnote-ref-1)
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, Fracción I. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibídem. Párr. 87. [↑](#footnote-ref-5)
6. Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004), disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

   II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

   … [↑](#footnote-ref-7)